



Crisis alimentaria en Costa Rica y cómo salir de ella

FRANKLIN CHARPANTIER

La crisis alimentaria mundial ya hizo sentir sus efectos en Costa Rica. Los precios internacionales de los alimentos básicos han venido subiendo a niveles sin precedentes desde el año 2007, su estabilización no se prevé en el corto plazo y, cuando se alcance, según los expertos, se logrará a un nivel de precios mucho más alto que el que prevalece hoy día.

El problema es complejo, dado su carácter multicausal y, por lo tanto, las soluciones deben ser formuladas con la participación de todos los sectores de la sociedad, liderados por el Gobierno. Entre las principales causas de la crisis cabe señalar las siguientes: (1) Incremento en los precios del petróleo, que afecta el costo de la producción de insumos, maquinaria, herramientas, equipo y otros materiales que se utilizan para la producción de alimentos, y que también afecta los fletes internacionales y el transporte local de insumos y productos, elevando en ambos casos los costos de la producción de los alimentos. (2) El impacto adverso del cambio climático, que produce sequías, inundaciones y otros fenómenos en países productores -por ejemplo, las sequías en Australia y China-, lo cual ha reducido la oferta de alimentos en los mercados. (3) La producción de biocombustibles (etanol y biodisel) a partir de cultivos anteriormente destinados a satisfacer necesidades alimentarias -como granos, soya, caña de azúcar y palma aceitera- también ha reducido en forma sensible la oferta de alimentos. (4) El aumento de la demanda de alimentos por parte de economías emergentes como China, India y Brasil, que reduce la disponibilidad de alimentos en los mercados internacionales. (5) Finalmente, ante el pánico por la misma crisis, los países adoptan políticas erradas que más bien la agravan, como poner obstáculos al libre comercio internacional de alimentos o provocar efectos especulativos en los mercados, lo que eleva artificialmente los precios de los alimentos.

El diagnóstico está hecho y, se mencionen éstos u otros aspectos como causantes de la crisis, lo importante es qué vamos a hacer los costarricenses para disminuir su impacto. Para ello debemos primero conocer la situación del país en cuanto a la producción de alimentos básicos y determinar si estamos preparados para resolver este problema.

Costa Rica, al igual que casi todos los países latinoamericanos, hace más de dos décadas fue condicionado por los organismos financieros internacionales, por medio de los programas de ajuste estructural (1983, 1985), a adoptar políticas de apoyo a los productos con mayor rentabilidad comercial y con mayores oportunidades dentro de un contexto de libre comercio. Estas políticas no han sido erradas por sí mismas, lo equivocado fue destinar los recursos en su totalidad a esas cadenas productivas y desatender la agricultura de consumo interno. Hoy día esos mismos organismos están reconociendo su error y solicitando a los países destinar mayores recursos para atender las necesidades alimentarias de la población.

Fue así como, aquí en el país, los recursos estatales destinados a los programas de investigación y transferencia de tecnología, de producción de semillas, de asistencia técnica y capacitación y otros, en las dos décadas anteriores se redujeron drásticamente, especialmente en maíz y frijol, actividades que no cuentan con una estructura organizativa fuerte. Por otro lado, la infraestructura pública para el secado, procesamiento, almacenamiento y distribución de alimentos se ha deteriorado y requiere de grandes inversiones para su reutilización. Lo mismo ha pasado con los programas crediticios para alimentos básicos, que no han podido competir con la agricultura de exportación, y con el seguro de cosechas, obsoleto éste en relación con las necesidades reales de los productores.

Otro aspecto que dificulta la reinserción de Costa Rica como país productor de granos básicos es que muchas de las áreas anteriormente productoras de éstos han sido sustituidas por productos de exportación o de consumo interno, menos riesgosos y más rentables y competitivos. Un grupo importante de productores se ha reubicado en este tipo de agricultura y otro grupo se ha trasladado a otros sectores de la economía, como el turismo, la industria, el comercio y los servicios, donde obtienen mejores y más estables ingresos.

Como se observa, la crisis no es temporal y, por lo tanto, las soluciones no pueden ser solo paliativas y para resolver la emergencia en el corto plazo. El país debe prepararse adecuadamente, de una vez por todas, para establecer las bases que garanticen la seguridad alimentaria de la población a largo plazo y reducir su vulnerabilidad alimentaria. Por ello, un plan de reactivación de la producción de alimentos, entre ellos los granos, debe considerar la disponibilidad de áreas para la siembra y tomar en cuenta a los productores dispuestos a incursionar de nuevo en la producción de estos granos y a los que se han mantenido en la actividad pero están dispuestos a aumentar sus áreas. Para lograr consolidar un plan de esta naturaleza, además de volver a invertir y destinar mayores recursos en

las campos señalados anteriormente, debe de ofrecérseles a los productores y productoras un clima de negocios adecuado con sistemas de agricultura por contrato y un sistema de negociación de precios razonable y acorde con las condiciones del mercado nacional e internacional, especialmente en frijol y maíz, donde la fijación oficial de precios, de acuerdo con el marco legal vigente, no es posible.

Actualmente, el país produce alrededor del 50 por ciento del arroz, el 22 por ciento del maíz blanco y el 23 por ciento del frijol que consumimos. En los últimos años, el aporte de la producción interna al consumo nacional de granos básicos ha sido cada vez menor, tal como se apuntó anteriormente, como resultado de que no han existido políticas de apoyo a estos rubros o no han sido prioritarias en las agendas de los gobiernos. Asimismo, como resultado de la poca atención al subsector alimentario, los rendimientos se han mantenido bajos durante varios años, mientras los costos de producción y comercialización suben constantemente, lo cual ha restado competitividad respecto de otros productos y una consecuente reducción de las áreas de siembras y de producción nacional.

Por eso es que el problema debe ser percibido no solamente como escasez temporal de alimentos, sino como un tema complejo que involucra, además de la disponibilidad de alimentos de calidad, inocuos y nutritivos, el acceso a ellos por parte de toda la población, y como un problema que afecta con mayor crudeza a los grupos vulnerables, ubicados en las áreas más empobrecidas del territorio nacional.

Como salida de la crisis, y considerando que este país tiene un gran potencial y una gran tradición cultural para la producción de este tipo de productos, el Gobierno ha decidido, por medio de la institucionalidad pública del sector agropecuario y del sector social, impulsar la ejecución de un *plan de alimentos*, que ha de ser integral e involucrar la participación conjunta de una serie de instituciones del sector agropecuario y del sector social, por lo que debe de responder a tres objetivos: (1) asegurar la disponibilidad de alimentos básicos (arroz, maíz, frijol y otros), (2) garantizar el acceso a alimentos de los grupos vulnerables, mejorando su seguridad alimentaria y nutricional y (3) contribuir en la reducción de los niveles de pobreza ante los incrementos de los precios de los productos de la canasta básica alimentaria. Asimismo, el *plan* se ha propuesto una serie de metas en ambos sectores, pero en lo que respecta al aumento de la disponibilidad de alimentos básicos se ha propuesto tres: (1) aumentar la participación de la producción nacional en el consumo de arroz de un 50 a un 80 por ciento, (2) aumentar la participación de la producción nacional en el consumo de maíz blanco de un 22 a un 70 por ciento y (3) aumentar la participación de la producción nacional en el consumo de frijol de un 23 a un 70 por ciento.

En aras del logro de esos objetivos y del cumplimiento de esas metas, se ha destinado recursos extraordinarios para reforzar aspectos de apoyo a la producción nacional de alimentos, ya propuestos como metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de intervenir en las siguientes áreas del *plan*: (1) fortalecimiento de los programas de producción de semillas, investigación y transferencia de tecnología, para encontrar nuevas variedades de alto rendimiento y resistentes a plagas y enfermedades que reduzcan la aplicación de agroquímicos y permitan modos de producción no lesivos ecológicamente; (2) búsqueda de sustitutos del maíz amarillo y de nuevas formas de alimentación animal y, sobre todo, de reducción de costos de producción -aspecto éste que impide en gran medida que la producción de granos y otros alimentos sea competitiva en el país-; (3) fortalecimiento de los programas de asistencia técnica y capacitación, riego y drenaje y comercialización, y desarrollo de sistemas de calidad, inocuidad, información e inteligencia de mercados, y (4) procura de la reutilización y el reequipamiento de las plantas de secado, procesamiento y almacenamiento de granos.

Se considera que, en el corto plazo, para que el productor decida incursionar de nuevo en la producción de alimentos, los aspectos fundamentales que deben de estar resueltos son: disponibilidad de semilla e insumos a precios razonables, condiciones adecuadas de crédito y seguro, asistencia técnica, disponibilidad de infraestructura de almacenamiento y secado y garantía de venta a un precio al que sea rentable la producción.

En el marco de este *plan de alimentos*, la rectoría del sector social y de lucha contra la pobreza, en coordinación con las instituciones del sector agropecuario, han identificado la necesidad de articular las propuestas dirigidas al fortalecimiento de la producción de alimentos con políticas sociales selectivas, a partir de programas que identifican poblaciones en condición de exclusión, pobreza y vulnerabilidad.

Pareciera que este es el momento oportuno para que, de una vez por todas, el país tome conciencia de la importancia de su seguridad alimentaria y, sobre todo, de una seguridad alimentaria que debe estar basada no solo en conceptos de disponibilidad y acceso a alimentos, sino además referida a alimentos de calidad, nutritivos e inocuos; pero si queremos lograr esto con producción nacional debemos pagar lo que éstos cuestan, para evitar que el productor siga transfiriendo recursos al consumidor.

El éxito del *plan* dependerá del compromiso y del trabajo conjunto de las instituciones del sector social y agropecuario involucradas en la producción, comercialización y acceso a alimentos, y de las instituciones sociales encargadas del combate a la pobreza y, especialmente, de la participación de las organizaciones de productores y productoras del país.

